



INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS TITULADO “SERVICIO PARA LA TRANSICION A LA VIDA INDEPENDIENTE”

Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir una vida plena gozando del mayor grado de independencia posible y a diseñar y poner en práctica su proyecto de vida. Sin embargo, con frecuencia, numerosas causas de origen personal, cultural, social y económico impiden o dificultan que las personas con discapacidad puedan desarrollar su vida de forma independiente.

Entre las causas personales cabe destacar que, tanto en casos de discapacidad de aparición temprana como sobrevenida se observa que, con frecuencia, las personas tienen dificultades para afrontar situaciones de vida cotidiana, baja autoestima, autopercepción de competencias y estilos de atribución causal inadecuados, así como peculiaridades en las relaciones familiares y características de la concepción cultural y social de la discapacidad en su entorno. Existen casos en los que este tipo de circunstancias han limitado el desenvolvimiento y desarrollo de experiencias y competencias para vivir de forma independiente. A todo ello hay que añadir otra serie de dificultades de orden socioeconómico como son el acceso al mundo laboral y a la vivienda, que disminuyen aún más las posibilidades de una vida independiente para las personas con discapacidad.

La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid recoge en su artículo 22.4 que *“las atenciones del sistema público de servicios sociales dirigidas a personas con discapacidad se regirán por los principios que favorecen la vida independiente, igualdad y no discriminación, teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género. Su finalidad será conseguir la mayor autonomía de la persona en su desenvolvimiento personal y su plena integración mediante actuaciones de carácter transversal para facilitar el acceso normalizado a todos los recursos relacionados con la autonomía, la participación y la integración en la vida social y económica”*.

A su vez, el Decreto 342/1999, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico básico de servicio público de atención a personas con discapacidad física y sensorial en la Comunidad de Madrid, define, entre otros aspectos, la finalidad y objetivos de estos Servicios Públicos, los principios organizativos y el funcionamiento de esta clase de centros, las prestaciones que incluyen y las fórmulas de gestión que pueden utilizarse por la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas, con el fin de garantizar las condiciones básicas y la previsión de los niveles de protección contemplados en la propia Ley, en la que, igualmente, se describen las Prestaciones y Catálogo de servicios del Sistema antes mencionado y que quedan integrados en la Red



de Servicios Sociales de las respectivas comunidades autónomas en el ámbito de las competencias que las mismas tienen asumidas.

En 2006, la Consejería consideró oportuna la puesta en marcha de una experiencia piloto de apoyo en procesos de transición a la vida independiente mediante un contrato de servicios. De acuerdo con los positivos resultados conseguidos, contrastados a la finalización de aquella experiencia, se ha mantenido este dispositivo desde entonces hasta el año 2020.

Con posterioridad a la puesta en marcha de esta iniciativa por parte de la entonces Dirección General de Servicios Sociales, se aprobó la Convención de Naciones Unidas de derechos de las personas con discapacidad firmada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, y que ha sido ratificada por el Gobierno de España el día 30 de marzo de 2007. Esta incluye como uno de los principios rectores de la misma *“el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas”*.

La Convención establece en su artículo 19 el derecho de todas las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad: *“Los estados partes en la presente convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad (...)”*.

En el ámbito estatal, como adaptación normativa a la propia convención, se ha aprobado el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social que incluye, entre sus principios, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas, así como el de vida independiente.

La Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad 2018-2022, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno del 24 de julio de 2018, acumula toda la experiencia de programación y análisis de los tres planes estratégicos sectoriales que la precedieron para recoger un conjunto integrado de acciones orientadas a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. La Estrategia contempla como principios rectores la autonomía individual, autodeterminación e independencia, la Igualdad de oportunidades y no discriminación, la inclusión social, la sensibilización, la calidad de vida, la protección de los grupos más vulnerables y la accesibilidad universal. Entre sus objetivos estratégicos se propone el mantenimiento de programas y servicios específicos para las personas con discapacidad en atención a las necesidades existentes, la generalización del modelo de atención centrado en la persona o el impulso de servicios que faciliten la autonomía personal y el disfrute de una vida independiente en la comunidad.

Así la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad 2018-2022, en el Área 7.1: “Área de atención social y promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad” se plantea como uno de sus objetivos específicos “Proporcionar apoyos a las personas con discapacidad para que puedan disfrutar de una vida



independiente”. En coherencia con este objetivo la Estrategia establece una línea de actuación que tiene por título: “Apoyos para disfrutar de una vida independiente” y dentro de ella la Medida 59: “Potenciar los programas de fomento de la autonomía personal y vida independiente en colaboración con entidades especializadas.

En este marco se estima que, como medida de promoción de un modelo de apoyo que complemente la potenciación de la autonomía personal y la participación socio-laboral, es conveniente que, entre los recursos ofrecidos por esta Consejería a las personas con discapacidad se incluya un dispositivo enfocado a apoyar el tránsito de personas con discapacidad a fórmulas de vida independiente.

La Consejería valora positivamente la experiencia del programa de pisos para la transición de la vida independiente desarrollada desde 2006. Esta valoración se sustenta en la favorable evolución apreciada en las personas participantes, derivada de la intervención y apoyo a las actividades incluidas en sus correspondientes planes individuales y de la mejora evidente en el conjunto de competencias para la autonomía personal y la vida independiente de las personas participantes. Se indican a continuación los antecedentes de los distintos contratos:

La Administración de la Comunidad de Madrid considera que el servicio para la transición a la vida independiente es un modelo de apoyo a las personas con discapacidad física y/u orgánica que contribuye a potenciar la autonomía personal, la participación social y la vida independiente.

Se considera oportuno, por tanto, dar continuidad a este programa de transición a la vida independiente para personas con discapacidad física y/u orgánica. Teniendo en consideración las características técnicas y organizativas del proyecto, al no contar con medios en la Consejería para asumir directamente la gestión de las actuaciones que incorpora, se hace necesario proceder a su contratación administrativa mediante un contrato de servicios.

En consecuencia, se procede a elaborar el presente Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de servicios para la transición a la vida independiente, conforme a lo establecido en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Para este nuevo contrato se prevé una duración de 2 años, prorrogables por uno o más periodos, hasta un máximo total de 5 años, y ascendiendo el importe anual del mismo a 213.134,52 euros (IVA incluido del 10%), que se imputará a la posición presupuestaria 231F/22709 del Presupuesto de Gastos de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

Madrid, a fecha de firma

EL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fdo.: Ignacio Tremiño Gómez

